**DERECHOS HUMANOS**

La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que este, o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos son los que hoy conocemos con la denominación de **derechos humanos.**

\*Son **inherentes** a la persona humana: todo ser humano por el hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle lícitamente. Corresponden a todo habitante de la tierra.

\*Bases de la inherencia:

- Naturalistas: los derechos humanos son la consecuencia normal de que el orden jurídico tenga su arraigo esencial en la naturaleza humana. La garantía universal de los derechos de la persona es vista como una comprobación histórica de su teoría.

- Emerge en Inglaterra el primer documento significativo que establece limitaciones de naturaleza jurídica al ejercicio del poder del Estado frente a sus súbditos: la Carta Magna de 1215. Junto con el Habeas Corpus de 1679, y el Bill of Rights de 1689, se consideran los precursores de las modernas declaraciones de derechos.

- Las primeras manifestaciones concretas de derechos individuales se encuentran en las revoluciones de independencia norteamericana e iberoamericana, así como en la revolución francesa.

De esta forma, los derechos individuales y las libertades públicas ingresan al constitucionalismo, y se reconocen así la intangibilidad de tales derechos que implicaba las limitaciones al alcance de las competencias del poder público.

**\*Internacionalización de los derechos humanos:**

- El desencadenante de este proceso fueron la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y la creación de la ONU en 1945. En 1948, fue adoptada la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y ese mismo año la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

- Estas declaraciones son actos solemnes por medio de los cuales quienes los emiten proclaman su apoyo a principios de gran valor, juzgados como perdurables. Los efectos de las declaraciones en general, y especialmente en su carácter vinculante, no responden a un enunciado único y dependen, entre otras cosas, de las circunstancias en que la declaración se haya emitido y del valor que se haya reconocido al instrumento a la hora de invocar los principios proclamados. Es decir que, en su origen, carecían de valor vinculante desde el punto de vista jurídico.

**\*Consecuencias de la inherencia**:

1. El Estado de Derecho (el ejercicio del poder debe sujetarse a ciertas reglas, las cuales deben comprender mecanismos para la protección y garantía de los derechos humanos).

2. Universalidad (por ser inherentes a la condición humana, todas las personas son titulares de los derechos humanos y no pueden invocarse diferencias de regímenes políticos, sociales o culturales como pretexto para ofenderlos o menoscabarlos).

3. Transnacionalidad (son inherentes a la persona como tal, por lo tanto, no dependen de la nacionalidad de esta o del territorio donde se encuentre, los porta en sí misma).

4. Irreversibilidad (una vez que un determinado derecho ha sido reconocido formalmente como inherente a la persona humana queda definitiva e irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada).

5. Progresividad.

**LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LA CONSTITUCIÓN NACIONAL**

**\*Tratados:** acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional, destinados a crear, modificar o extinguir obligaciones internacionales. Pueden ser llamados pactos, convenciones, acuerdos, etc. Pueden ser firmados entre Estados (bilaterales o multilaterales) o entre un Estado y un organismo internacional. De ellos surgen obligaciones y responsabilidad de su incumplimiento.

- Los protocolos son accesorios a los tratados, nunca son autónomos porque siempre se desprenden y dependen de un tratado base.

- Etapas de un tratado:

1. Negociación (se pone en discusión el tema y la forma en que se regula, concurren los estados parte, y al concluir hay un acto de firma en el cual si el estado firma el tratado significa que autentifica el texto y contrae una obligación de abstención).

2. Aprobación (es la confirmación de voluntad del estado del embajador respecto del jefe de estado, cada estado regula según su derecho interno la aplicación, en Arg. la aplicación es una atribución del Congreso, que se hace en ambas cámaras y la aprobación final se hace por ley).

3. Ratificación o adhesión (se ratifica la voluntad de las negociaciones o se adhiere a lo que se dijo, pueden hacerse reservas –se ratifican algunas partes y otras no- o declaraciones interpretativas –se declara de qué forma se aplicará un art. del tratado en el derecho interno-).

4. Entrada en vigor (cada tratado establece cómo será exigible para las partes que lo ratifican).

**\*Ratificación de un tratado**: es el acto por el cual se incorpora un tratado al derecho interno, cada Estado tiene su forma de hacerlo:

- En Argentina la ratificación se hace a través del Congreso, por ambas cámaras, y luego por el poder ejecutivo que recibe el papel de ratificación de la cancillería y lo firma para finalizar el acto.

- Se pueden hacer reservas (no se ratifica una parte del tratado siempre que no afecte a la esencia del mismo) o declaraciones interpretativas (la realiza el Estado para el pueblo explicando de qué manera se interpretará un artículo del tratado en el derecho interno) a la hora de la ratificación.

\*Declaraciones: no se ratifican, se imponen al Estado por el simple hecho de ser parte de un organismo internacional, y tampoco pueden denunciarse. Se encuentran vigentes dentro del Estado obligatoriamente sólo por ser parte de la organización que la regula.

- Son parte del soft law o “derecho débil”, porque son actos unilaterales (se declara algo) y son más fáciles de incumplir. No tienen un responsabilidad ni obligaciones que surjan de su incumplimiento.

\*Un Estado puede **denunciar** un tratado, esto significa salir del mismo.

\*Los tratados internacionales son regulados por la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales.

**\*Principios**: son como grandes reglas de comportamiento que permiten una interpretación y pueden estar o no volcados en una norma jurídica.

- Universalidad: el solo hecho de ser humanos nos hace portadores de derechos (art. 1 CADH/art. 2 PIDCP, PIDESC, Decl. Universal DH y Decl. Americana DH)

- Indivisibilidad: los derechos no pueden separarse en el concepto de igualdad, ni jerarquizarse.

- Interdependencia: los derechos se encuentran interconectados unos con otros.

- Progresividad o no regresividad: se deben acrecentar las garantías de derechos fundamentales en un marco de desarrollo progresivo.

- Pro-homine: los derechos son siempre en favor de la persona humana, y buscan la solución más favorable para el más vulnerable.

**JERARQUÍA CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DH**

\*Protocolo de San Salvador: es un protocolo adicional a la CADH, aprobador por Argentina en 1996, y ratificado en 2003.

**\*Ingreso y egreso de normas al bloque de constitucionalidad:**

**1) Ingreso:**

- ART 75 inc 22: la presente norma le permite al legislador ordinario elevar, en el futuro, nuevos tratados a la jerarquía constitucional.

- Declaraciones: la redacción de la norma no expresa que sea posible, sin embargo, es posible que el Congreso eleve no sólo tratados sino también declaraciones a la jerarquía constitucional, pero con la salvedad de exigir que las mismas se encuentren investidas del mismo grado de consenso que las dos incluidas expresamente en el bloque.

- Tratados mixtos: la norma no lo prohíbe ni lo aclara expresamente.

- Retroactividad y progresividad: si la tendencia es a reconocer (“positivizar”) derechos ya existentes, y a mejorar la protección de los mismos, puede perfectamente aumentarse el rango jerárquico de tratados ya existentes.

- Jerarquía de los tratados: ¿los tratados elevados a jerarquía constitucional gozan de la misma jerarquía que los que están expresamente mencionados en ella? ¿Gozan de la misma jerarquía de la constitución?

+ 1º teoría: complementan pero no derogan (CN+TTDH) 🡪 Bidart Campos, Sabsay, Cayuso, Saba.

+ 2º teoría: a nivel jerarquía los tratados se encuentran un nivel más abajo que la CN (CN > TTDH) 🡪 Badeni, Dalla Via.

**2) Egreso**

- Denuncia: es un instituto por el cual un Estado se desobliga de los compromisos asumidos en un tratado mediante una manifestación unilateral en tal sentido. Es una de las formas de dar por terminado un tratado. Es válida y surte efectos siempre y cuando el tratado prevea expresamente dicha posibilidad o cuando ella pueda deducirse de sus cláusulas, pero, en este último caso, la voluntad de denunciarlo. Debe notificarse con un año de anticipación.

- Efectos de la denuncia: si bien el tratado sale por denuncia, el contenido (los derechos en él contemplado) permanece dentro del sistema con jerarquía constitucional.

**\*La recepción del derecho internacional de derechos humanos en la reforma de 1994**

- El art. 75 inc 22 de la CN agregado en 1994, elevó a jerarquía constitucional once instrumentos internacionales de derechos humanos, y dejó abierta la posibilidad de agregar más.

* Decl. Americana de los Derechos y Debers del Hombre.
* Decl. Universal de los Derechos Humanos.
* Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
* Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
* Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y su Protocolo Facultativo.
* Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
* Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
* Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
* Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
* Convención sobre los Derechos del Niño.

Y se agregaron tres instrumentos más desde la reforma del ’94:

* Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1997).
* Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad (2003).
* Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (2014).

**\* MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN**

1) “Condiciones de su vigencia” de los instrumentos internacionales.

A) Que estén EN VIGOR. Los tratados se incorporan al derecho argentino siempre que estén vigentes en el ámbito internacional. Un acto unilateral del estado, como la ratificación, no puede poner en vigor una norma que según el derecho internacional no lo está, porque lo impide el principio de coordinación de voluntades entre sujetos. La ratificación de un estado no implica obligarse internacionalmente ni incorporar al derecho interno, sino manifestar su voluntad de hacerlo. Recién se incorpora cuando entre en vigor en el ámbito internacional. Hasta entonces, no resulta intocable en los tribunales nacionales. (tratados, no declaraciones).

B) RESERVAS Y DECLARACIONES INTERPRETATIVAS:

El texto con el que se firma no necesariament4e es el mismo con el que entra en vigor respecto de todos los estados parte, por el instituto de las reservas.

# Los tratados rigen según como hayan sido ratificados. Puede regir un mismo tratado de distinta forma en distintos países. Las reservas generalmente se introducen al ratificar o adherirse a un tratado, debido a las inervaciones que el órgano legislativo opone al aprobarlo internamente. Otras veces ya se realiza en el momento de la firma. Las declaraciones interpretativas logran su objetivo de ser “reservas disfrazadas”, porque propicia unilateralmente una determinada interpretación a una clausula: está modificando los efectos del tratado respecto de sí mismo. No se jerarquiza el continente (el tratado en su totalidad), sino aquella parte del contenido que resulte obligatorio para Argentina.

C) LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL:

En el fallo Giroldi (1995) se estableció que “las condiciones de su vigencia” significa “tal como la convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”. Es decir que podemos invocar ante nuestros tribunales y hacer ingresar a nuestro sistema la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que es el único tribunal internacional en la materia con competencia respecto de nuestro país. La aplicación de esta jurisprudencia debe hacerse como pauta interpretativa en forma dinámica.

Un año después, la Corte añadió, en el fallo Bramajo (1996), que la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debía “servir de guía para la interpretación de preceptos convencionales”. Es decir que los informes individuales de la Comisión también ingresan las condiciones de vigencia de la Convención (y también la declaración) Americana de Derechos Humanos.

2) La jerarquía constitucional

a) IGUALDAD DE RANGO: se coloca a los instrumentos enumerados en pie de igualdad con la constitución misma, conformando el “bloque de constitucionalidad”. Se forma un bloque único de legalidad cuyo objeto y fin es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos: deben ser interpretados en conjunto.

b) EQUIPARACIÓN, PERO NO “INCORPORACIÓN”: elevar la jerarquía constitucional no es lo mismo que incluir en la constitución. Son normas que se encuentran en el mismo nivel jerárquico, pero que no conforman un único cuerpo normativo, ya que cada una conserva su fuente. Fuente de la carta magna: el ejercicio del poder constituyente por parte del pueblo argentino. Fuente de instrumentos internacionales: la coordinación de voluntades de los miembros de la comunidad internacional. No hay “constitucionalizarían” de instrumentos internacionales (si lo hubiera, se estaría reformando la CN, incluyendo nuevas normas en ella), Sino “jerarquización” o “elevación a la jerarquía constitucional”.

3) “…No derogan articulo alguno de la Primera Parte de esta Constitución…” # Viene del art. 27: “se deben respetar los principios de derecho público. Marca que el tratado tiene un límite: se ve frenado por los principios de derecho público de la CN. Ej.: el principio de legalidad. Me está diciendo que ante un conflicto normativo, por el “no derogan” se pone en duda si está un poquito la CN por encima de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

A) Posturas negatorias de la jerarquía constitucional:

Hay quienes sostienen que dichos instrumentos tienen jerarquía constitucional limitada, y que la no derogación alude a que su jerarquía es inferior a la CN; tienen jerarquía cuasi-constitucional. Están por debajo de la CN pero por encima de los demás instrumentos internacionales, como si fueran normas constitucionales de segundo rango.

B) Postura que sostiene la Jerarquía constitucional ATENUADA:

Si bien admiten la jerarquía constitucional de los instrumentos de derechos humanos, la restringen/limitan para ciertas normas contenidas en ellos, “pudiendo ser alterados o suprimidos a través del procedimiento de denuncia indicado en dicha norma”.

C) Postura de diferencias jerárquicas dentro del Bloque:

En caso de confrontación entre una norma de un instrumento internacional mencionado en el art. 75 inc. 22, y una de la segunda parte de la CN, se deben dar prioridad a aquellos. Si se da con la primera parte de la CN, debe primar ésta por la prohibición de modificarlos en la ley que declaro la necesidad de la reforma constitucional.

D) La jurisprudencia de la Corte Suprema:

“Los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación en virtud del cual han cotejado los tratados y artículos constitucionales y han verificado que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o contradecir”

La intervención del constituyente reformador, al elegir ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos para asignarles jerarquía constitucional (juicio de COMPROBACION), no puede ser desconocida por el intérprete, ni puede pretenderse aplicar a dichos instrumentos las mismas reglas que a los demás.

En síntesis, la Corte no admite diferencias de jerarquía normativa dentro del Bloque de Constitucionalidad.

- Además de que no derogan articulo alguno de la 1°parte de la CN, no derogan instrumento alguno de los internacionales.

- El jerarquizar un tratado internacional no quita ni reforma la constitución, sino que agrega derechos y garantías que antes de la reforma ya estaban en la constitución, porque debíamos considerarlos implícitos o no numerados.

4) “Deben entenderse COMPLEMENTARIOS de los derechos y garantías por allá reconocidos”

La complementariedad se manifiesta en 2 aspectos:

a) Complementariedad de derechos.

Los nuevos derechos incorporados son adicionales a los ya reconocidos; amplían, perfeccionan, integran, adicionan, completan, suplementan (complementan) el texto constitucional. Su existencia no está subordinada a la existencia de un derecho “principal”; no hay relación de subordinación, sino que extienden el marco de protección de los derechos fundamentales. Hay en si nivelación, igualdad en el rango jerárquico normativo.

b) Complementariedad de jurisdicciones.

Si a través del ejercicio de las acciones que el derecho interno pone al alcance del individuo, este no obtiene adecuado resguardo a sus derechos contemplados en los instrumentos internacionales, existe otra jurisdicción a la que el individuo puede acudir en busca de reparación. La complementariedad está en que si la jurisdicción interna no cumplió los fines del tratado y no protegió adecuadamente los derechos en los consagrados, la jurisdicción internacional la complementa.

**\*Control de Convencionalidad**

- El control de convencionalidad busca, establecer si la norma que está siendo objeto de revisión se adecua a lo determinado por la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, si la misma resulta convencional o no. En caso de ser tenida como “inconvencional”, el efecto que la misma trae aparejada es su invalidez, y esto por ende determina que la misma no pueda ser aplicada, incluso si se trata de la propia Constitución Nacional. Este control, se debe realizar teniendo en cuenta las cláusulas de la CADH, más las interpretaciones que de ello ha hecho la Corte IDH en sus sentencias y opiniones consultivas.

- La Corte IDH ha señalado que el control de convencionalidad debe ser practicado de oficio por parte de los jueces: «los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes». Erróneamente se piensa que las partes son las que deben impulsar o pedir al juez que realice control de convencionalidad. Dicho control es una obligación («deben ejercer el control») a cargo de los jueces, que no pueden eludir bajo el pretexto de la falta de solicitud por las partes.

> FALLO GIROLDI

Hechos del caso: el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de la Capital Federal, condenó a Horacio D. Giroldi a la pena de un mes de prisión en suspenso, como coautor penalmente responsable del delito de robo simple en grado de tentativa. La defensora oficial interpuso recurso de casación. El problema radicó en la inconstitucionalidad del límite impuesto por el art. 459, inc. 2 del Código Procesal Penal de la Nación, por contrariar lo dispuesto en el art. 8, inc. 2, ap. h) de la Convención Americana sobre Derecho Humanos. La Cámara Nacional de Casación Penal, rechazó el planteo de inconstitucionalidad y dio origen a la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que declaró admisible el recurso.

Doctrina: La Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresó que ante la reforma constitucional de 1994 que confirió jerarquía constitucional a varios acuerdos internacionales, corresponde determinar si dentro del ordenamiento procesal penal existen el órgano y los procedimientos para dar adecuada satisfacción a la garantía constitucional en cuestión. Esta Corte, sostuvo que la forma más adecuada para asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es declarar la invalidez constitucional de la limitación establecida en el art. 459, inc. 2 del Código Procesal Penal de la Nación.

Según dicha Corte, “garantizar” implica el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. La tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del art. 1.1 de la Convención; garantizar comprende, el deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró procedente la queja y el recurso extraordinario y dejó sin efecto el pronunciamiento apelado. Afirmó que debía acumularse al principal y devolverse al Tribunal de Origen, a fin de que, por quien correspondiese, se dicte un nuevo fallo conforme a lo que esta Corte resolvió.

> FALLO BRAMAJO

Hechos del caso: Hernán Bramajo, fue detenido el 1º de julio de 1992. El fiscal acusó al procesado por delito de homicidio calificado en concurso material con el robo doblemente agravado por haber sido cometido en armas, en poblado y en bando y requirió la pena de reclusión perpetua con la reclusión por tiempo indeterminado.

El Tribunal anterior, concedió la excarcelación por aplicación del art. 1º de la ley 24.390, al cumplir los tres (3) años de detención en prisión preventiva; concedió la excarcelación bajo garantía real debido a la gravedad de los delitos atribuidos al procesado, la pena solicitada por el fiscal y la circunstancia de que se registra una condena.

El representante del Ministerio Público cuestionó la validez del art. 1º de la ley 24.390 debido a que se hallaría en colisión con lo dispuesto por el art. 7º, inc. 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; aduce, también, que, bajo el pretexto de reglamentar un tratado internacional, la ley 24.390 lo ha desvirtuado.

El recurso federal resulta procedente en la medida en que se ha cuestionado la validez de una ley nacional por ser contraria a un Tratado Internacional; la resolución impugnada es equiparable a sentencia definitiva, ya que se trata de una cuestión que reviste gravedad institucional, en que el criterio adoptado por el a quo compromete la administración de justicia al afecta la forma de aplicación de la ley procesal penal.

Doctrina: La Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirma que si bien la ley 24.390 fija plazos para la procedencia de la libertad caucionada, de ello no se deriva que vulnere lo establecido por el art. 7º, inc. 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos puesto que la Comisión no prohíbe que cada Estado Parte establezca plazos de duración de la detención del juzgamiento, lo que no admite es la aplicación de aquéllos en forma automática sin valorar otras circunstancias. Sostiene que la ley 24.390 no ha derogado las normas que rigen el instituto de la excarcelación, razón por la cual las disposiciones de aquélla deben ser interpretadas a la luz de las normas respectivas del Código de Procedimiento en Materia Penal y del Código Procesal Penal.

Este Tribunal, considera que la validez del art. 1º de la ley 24.390 se halla supeditada a la circunstancia de que los plazos fijados en aquella norma no resulten de aplicación automática por el mero transcurso de los plazos fijados, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en el art. 380 del Código de Procedimiento en Materia Penal y en el art. 319 del Código Procesal Penal.

Dicha Corte, sostiene que cuando un precepto, basado en la libertad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios axiológicos enunciados en otro de rango superior y produzca consecuencias desvaliosas, resulta necesario dar preeminencia al espíritu de la ley, al conjunto armonioso del ordenamiento jurídico y a los preceptos fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el ordenamiento normativo.

Afirma, que en caso de obtener la libertad, el acusado, intentará burlar la acción de la justicia, razón por la cual debe revocarse la resolución impugnada, puesto que la interpretación efectuada por el a quo del art. 1º de la ley 24.390 es incompatible con la jurisprudencia elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la establecida por esta Corte; así, rechaza la inconstitucionalidad del art. 1º de la ley 24.390 y se revoca la resolución impugnada; haciéndose saber y volviendo al Tribunal de Origen para que se dicte un nuevo fallo con arreglo a derecho.

>FALLO ARANCIBIA CLAVEL

(En el caso "Arancibia Clavel" la Corte resolvió que la participación en una asociación ilícita en durante los años 1974 y 1978 para cometer delitos de lesa humanidad, constituía un delito contra la humanidad que era imprescriptible. De esta manera, descartó que al castigar este hecho se violara el principio de irretroactividad de la ley penal.)

Hechos: Durante 1974 y 1978, E. Arancibia Clavel fue funcionario de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA), una organización que se dedicaba a perseguir opositores políticos al régimen de Augusto Pinochet en nuestro país. En el marco de estas actividades, se le imputó el homicidio de Santiago Prats y Sofía Cuthbert en la Argentina, así como participación en la tortura y homicidio de oponentes políticos y posterior sustracción de sus identificaciones para reutilizarlas. El Tribunal Oral Federal que lo juzgó en la Argentina lo condenó a la pena de reclusión perpetua.

Arancibia apeló esta sentencia tanto por su declaración de responsabilidad en la muerte del matrimonio Prats como por su participación en la asociación ilícita dedicada a cometer los delitos mencionados.

En lo que aquí interesa, la Cámara Nacional de Casación Penal revocó la condena por su participación en la asociación ilícita. El fundamento fue que este delito no era de lesa humanidad y que se encontraba prescripto.

El Estado chileno, querellante en la causa, llevó el caso a la Corte Suprema argumentando que el tribunal de Casación no había aplicado correctamente la ley penal y que el delito no estaba prescripto.

Decisión de la Corte: Por unanimidad, la Corte consideró que por razones formales no podía revisar la manera en que Casación había aplicado la ley penal. Sin embargo, resolvió que debía de oficio -es decir, por su propia iniciativa- analizar si el delito estaba prescripto o no, porque se trataba de una cuestión de orden público. En este sentido, resolvió que, según el derecho internacional de los derechos humanos, la participación en una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lesa humanidad también constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, el delito no había prescripto (Voto de los jueces Zaffaroni, Highton, Petracchi, Boggiano, Maqueda. En disidencia Fayt, Vázquez y Belluscio).

Los jueces Zaffaroni, Highton, Petracchi, Boggiano y Maqueda concordaron en tres puntos centrales:

a) que la Corte debía tratar la cuestión de la imprescriptibilidad que el Estado chileno había obviado en su recurso;

b) que los delitos cometidos por Arancibia eran de lesa humanidad e imprescriptibles según el derecho internacional de los derechos humanos;

c) que era posible juzgarlos y castigarlos sin violar el principio de irretroactividad de la ley penal.

Fundaron la obligación de resolver la cuestión de la imprescriptibilidad en que se hallaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino. Luego resolvieron que, en función del derecho internacional de los derechos humanos, la participación de Arancibia Clavel en esta asociación ilícita constituía un delito de lesa humanidad y que, por ser de lesa humanidad, era imprescriptible. Basaron su criterio en el derecho convencional -es decir, en los tratados y la norma escrita-, pero también en el derecho consuetudinario - que significa que, pese a no haber normas escritas, los estados aceptan como obligatoria la prohibición de una conducta o la obligación de realizarla - que es receptado por el artículo 118 de la Constitución Nacional.

Finalmente, los jueces decidieron que sancionar a Arancibia por este delito no violaba el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal. Los jueces que votaron en disidencia sostuvieron que debía declararse la prescripción del delito porque, de lo contrario, se violaría el principio constitucional de legalidad, que prohíbe aplicar en forma retroactiva una ley más gravosa dictada con posterioridad a la comisión del delito.

>FALLO FONTEVECCHIA

La CSJN sostiene que el tribunal interamericano se extralimitó en su función, en tanto al “revocar” una sentencia local incurrió en un “mecanismo previsto que no se encuentra previsto por el texto convencional” (Considerando N° 12); Así, sostuvo -luego de citar el art. 63.1 de la CADH- que la Convención Americana “no contempla la posibilidad que la Corte Interamericana deje sin efecto una sentencia dictada en sede nacional” (considerando N° 13) y que incluso la propia Corte Interamericana ha dicho que este tipo de decisiones resulta en ocasiones “improcedente”.

De lo expuesto surge una premisa y una posición política en la CSJN, más que notoria: la Convención Americana no puede “revocar” sentencias de tribunales nacionales. A su vez, esta polémica posición, es justificada mediante la invocación de fallos de la Corte IDH en donde el tribunal afirma que, en algunos casos, cómo modo de reparación, sus sentencias no pueden ser cumplidos. Estas citas resultan totalmente alejadas de lo efectivamente resuelto en aquellos casos, dado que allí las sentencias de la Corte se referían a hechos totalmente distintos y no a la potestad de un Estado “de limitar o no” los efectos de un fallo.

**\*Sistema universal de protección de los DH**

- Derecho internacional e los DH: es un sector del ordenamiento internacional caracterizado por su progresividad y su dimensión axiológica. Sus normas más básicas han pasado a formar parte del derecho internacional; se puede decir que constituyen el núcleo esencial del orden público de la comunidad internacional.

- Nacimiento del derecho internacional de DH: éste incorporó la dignidad de la persona humana como un valor autónomo. La comunidad internacional le impone a los Estados obligaciones internacionales establecidas por el derecho internacional. Por esto, se creó el sistema internacional de protección de los DH, pues está compuesto por normas sustantivas que enuncian obligaciones, y por normas procesales que han establecido mecanismos internacionales de control.

- La Asamblea General de la ONU creó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DH, esta depende de la Secretaría General y tiene funciones de promoción y protección, coordina actividades en el Programa de DH de la organización, proporciona asistencia técnica y financiera, y además desempeña funciones que le sean encomendadas por el órgano del sistema.

**\*Sistema Interamericano de protección de los DH**

- OEA: los estados americanos aprobaron dos instrumentos judiciales de DH, la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

- Convención Americana de Derechos Humanos: creada en 1969 y puesta en vigor en 1979, establece las obligaciones de los Estados (arts. 1 y 2) y sólo reconoce derechos de primera generación (civiles y políticos). No dicta sentencias, sino informes. Está conformada por 7 comisionados, los cuales para acceder a su cargo solo deben cumplir los requisitos de alta autoridad moral y versación en derechos humanos, su cargo dura 6 años con una sola reelección permitida, y son propuestos por los Estados miembros de la OEA (cada estado propone tres candidatos).

**>Artículo 29. Normas de Interpretación:**

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; es decir, ninguna de las disposiciones de la CADH puede ser interpretada en el sentido de suprimir derechos o libertades reconocidos en el Pacto o limitarlos en mayor medida que la ya prevista.

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; es decir, que las disposiciones de la CADH no deben ser interpretadas en el sentido de delimitar el goce o ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en las leyes internas de los Estados partes o reconocidos en otro instrumento del que sean parte los Estados.

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno; es decir, las disposiciones de la CADH no deben interpretarse en el sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que deriven de la forma democrática representativa de gobierno.

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza; es decir, las disposiciones de la CADH no deben ser interpretadas en el sentido de excluir o limitar el efecto que puedan producir la Decl. Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

- Este artículo hace referencia al principio *pro homine*, el cual la Corte IDH precisó indicando que, si a una misma situación le son aplicables la CADH y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana, y en consecuencia, al interpretar la Convención debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado o la que prevé la restricción menor.

**>Artículo 1: Deber de respetar y garantizar**

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

**>Artículo 2: Disposiciones de “otro carácter”**

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

**>Artículo 32: Deberes**

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

**\*Comisión Interamericana de Derechos Humanos:**

- Integración: siete comisionados de diferentes estados miembros de la OEA, elegidos por voto de los representantes en la Asamblea General. Son propuestos por los Estados parte, cada uno propone tres candidatos, de los cuales dos no son de la nacionalidad del Estado.

- Legitimación: el único requisito para los comisionados es tener una reconocida alta autoridad moral y versación en derechos humanos, no es necesario tener título profesional de abogado.

- Competencia: (art. 41 de la Convención)

>Función principal: promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.

>Funciones y atribuciones:

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en el continente.

b) la Comisión lo utiliza para ejercer la facultad de dictar medidas cautelares.

c) preparar estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones.

d) solicitar informes a los estados miembros para realizar un seguimiento en materia de medidas sobre derechos humanos que sea adoptadas.

e) atender consultas formuladas por los estados miembros y dentro de las posibilidades brindarles el asesoramiento solicitado.

f) la Convención reconoce el funcionamiento de la Comisión.

g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la OEA.

- Es posible realizar una presentación de peticiones frente a la Comisión. En la opinión Consultiva 22 de la Corte IDH, se desarrolla el concepto de persona que lo legitima para presentar las peticiones.

>Particulares pueden presentarla por sí mismos, por un grupo de personas, o a través de un tercero (éste no funciona como un abogado ni representante, no es víctima solo cumple el rol de peticionante).

- Requisitos para la presentación de una petición: Art. 46 CADH.

1. Agotamiento de recursos internos: que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna.

2. Que la petición sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva.

\*Excepciones (brindadas por el art 46 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos):  
a) que no exista legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho presuntamente violados.

b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido el agotamiento de los mismos.

c) que haya retardo injustificado en la decisión de los recursos internos.

3. Que la materia de la petición no esté pendiente en otro proceso internacional.

4. Que los datos e información del peticionante estén debidamente completos, así como la firma solicitada.

\*Excepciones de la **OPINION CONSULTIVA 11**:

INDIGENTES: en caso de no existir un sistema judicial gratuito, no se ven obligados a agotar los recursos.

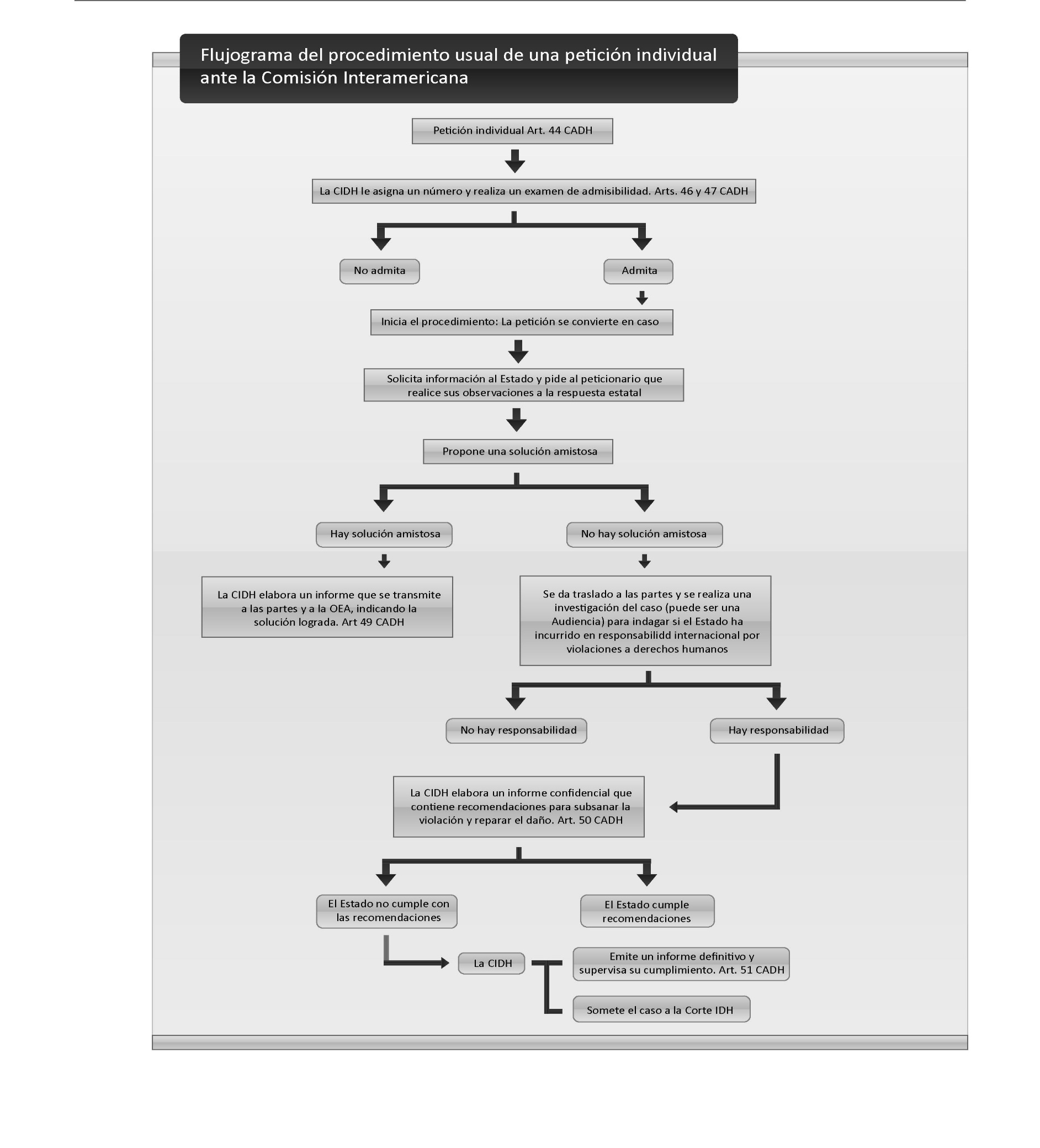
TEMOR GENERALIZADO: cuando debido a una situación crítica que atraviesa el Estado, los abogados por razón del temor generalizado se niegan a aceptar determinados casos de representación legal.

>OPINION CONSULTIVA 22: “En cuanto a la Convención Americana, la función consultiva permite al Tribunal interpretar cualquier norma de la misma, sin que ninguna parte o aspecto de dicho instrumento esté excluido del ámbito de interpretación. En este sentido, es evidente que la Corte IDH tiene, en virtud de ser “intérprete última de la Convención Americana”, competencia para emitir, con plena autoridad, interpretaciones sobre todas las disposiciones de la Convención, incluso aquellas de carácter procesal”.

>FALLO MEVOPAL S.A

Hechos del caso: Mevopal S. A. es una empresa constructora (persona jurídica o ficta). Esta empresa, tenía tres (3) contrato de locación de obras suscriptas con el Instituto Provincial de la Vivienda en la Provincia de Buenos Aires. Dicha provincia, incumplió estos contratos; y por incumplimiento de éstos, la empresa perdió su capital, y subsiste como persona jurídica, pero sin trabajo. El problema de dicho caso radica en que, si la Comisión está habilitada para conocer la petición presentada por Mevopal Sociedad Anónima. Con anterioridad, la empresa interpuso una demanda contencioso-administrativa ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Dicha Corte, consideró que hubo culpa concurrente, y sólo resarció los gastos improductivos producidos a Mevopal en las tres (3) obras. Luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al intervenir, redujo a dos (2) obras el reconocimiento de los gastos improductivos. Momento en el cual, la peticionaria ejerció sucesivamente el recurso extraordinario y de queja, siendo éste último rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Doctrina: La Comisión consideró esta petición inadmisible por ser evidente su total improcedencia de acuerdo con lo establecido en el art. 47 en concordancia con el art. 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que las personas jurídicas no están protegidas por dicha Convención; estas personas son ficciones jurídicas sin existencia real en el orden material; y como dice el art. 1.2 de la Convención, “persona es todo ser humano.”

**\*Procedimiento de la CIDH:**

- La Comisión funciona como una antesala que revisa los requisitos establecidos en el art. 46 para las peticiones, esta es la etapa de admisibilidad. Si verifica que los requisitos están completos y hay efectivamente una presunta violación a uno o varios derechos humanos, se procede a realizar un pedido de informe que corresponde a la pertición de la víctima, y le da la posibilidad al Estado de refutarla, o demostrar que, en el período de admisión la lesión ya ha sido corregida. La Comisión siempre va a buscar arribar a una solución amistosa entre las partes.

Si el Estado contesta o no el informe, igualmente la Comisión procede a verificar la subsistencia de la violación del derecho. Si ésta no subsiste, la petición se archiva. Puede suceder que se declare inadmisible, y el procedimiento finalice allí, o puede suceder que se declare admisible y se convierta en un caso propiamente.

Si se declara admisible, se propone una solución amistosa, se activan los mecanismos de control interno. Si se llega a una solución amistosa, la Comisión redacta un informe público conteniendo toda la información del procedimiento, que será de carácter público, previa notificación al peticionario y al Estado en cuestión (art. 49), y luego se eleva a la OEA para que lo publique.

Si hay una subsistencia de la violación, y no es posible llegar a una solución amistosa, la Comisión redactará un informe preliminar (art 50) que no será público, sólo para las partes involucradas. En este informe la CIDH emite su opinión y le brinda un plazo de tres meses al Estado para que cumpla con sus recomendaciones, pasado el plazo verifica la situación, y emite un informe final (art 51). Aquí, nuevamente puede llegarse a una solución amistosa si el Estado subsanó el daño causado, de lo contrario el caso es enviado a la Corte IDH **solamente por la Comisión** y es sometido a votación de los jueces que pueden agregar su opinión.

- LOS INFORMES DE LA CIDH NO SON OBLIGATORIOS, CONTIENEN PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES, PERO NO SON OBLIGATORIOS. TIENEN EFECTO VINCULANTE PORQUE GENERAN UNA MALA IMAGEN INTERNACIONAL.

>FALLO VERBITSKY

Hechos: El Centro de Estudios Legales y Sociales interpuso un habeas corpus en representación de todas las personas detenidas en prisiones y comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Relató que los detenidos, incluidos mujeres y menores, padecían condiciones de superpoblación y hacinamiento porque los calabozos estaban en un estado deplorable de conservación e higiene. El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires rechazó el hábeas corpus, al considerar que debía analizarse cada caso en concreto. La actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, que fueron declarados inadmisibles por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Contra ese pronunciamiento interpuso un recurso extraordinario, que fue denegado y dio lugar a un recurso de queja.

Decisión de la Corte: La Corte consideró que la presencia de adolescentes y enfermos en establecimientos policiales y/o en comisarías superpobladas de la Provincia de Buenos Aires era susceptible de configurar un trato cruel, inhumano o degradante u otros análogos y generar responsabilidad del Estado Nacional, con flagrante violación a los principios generales de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas. Por este motivo, sostuvo que, dado que dicha situación ponía en peligro la vida y la integridad física del personal penitenciario y policial y generaba condiciones indignas y altamente riesgosas de trabajo, debía instruirse a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los demás tribunales de dicha provincia para que hicieran cesar urgentemente el agravamiento o la detención misma. Por otra parte, reconoció legitimación al Centro de Estudios Legales y Sociales para interponer el hábeas corpus colectivo a pesar de que la Constitución Nacional no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible en forma colectiva. En consecuencia, fijó los estándares de protección de los derechos de los presos que los distintos poderes provinciales deben respetar para cumplir con el mandato de la Constitución Nacional y con los pactos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. También ordenó a la justicia provincial a verificar y remediar las condiciones indignas de detención de los presos detenidos a su disposición, así como disponer la inmediata libertad de los adolescentes y enfermos detenidos en comisarías. Por último, exhortó a los poderes ejecutivos y legislativos provinciales a revisar la legislación que regula la excarcelación y la ejecución penitenciaria y a tomar como parámetro la legislación nacional en la materia. Para asegurar una solución efectiva y sólida a esta situación, la Corte recomendó que se conformara una mesa de diálogo en la que intervinieran las autoridades provinciales y las organizaciones de la sociedad civil y retuvo el poder de controlar la adopción de las medidas ordenadas en el fallo. (voto de los jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco y Lorenzetti. El Dr. Boggiano votó en disidencia, mientras que los magistrados Fayt y Argibay votaron en disidencia parcial). El Dr. Boggiano consideró que el hábeas corpus interpuesto a favor de la totalidad de las personas detenidas alojadas en establecimientos policiales y comisarías bonaerenses importaba una impugnación genérica al sistema carcelario provincial, pero que no le competía a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, por lo que excedía las facultades jurisdiccionales de la Corte.

>FALLO CARRANZA LATRUBESSE.

La Corte Suprema invirtió su propia doctrina y estableció que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son vinculantes y de acatamiento obligatorio para el Estado argentino. Lo hizo al darle la razón a un ex juez de Chubut cesanteado durante la última dictadura, Gustavo Carranza Latrubesse, a quien el organismo internacional había ordenado reconocer una indemnización al considerar violados sus “derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”. Los tribunales argentinos, originalmente, le habían negado la posibilidad de reclamar al catalogar su demanda como una cuestión “política no justiciable”.

**\*La Corte Interamericana de Derechos Humanos:**

- Integración: integrada por siete miembros, propuestos por los países parte de la OEA y elegidos por votación de los mismos, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, y que reúnan las condiciones para ser jueces de la Corte Suprema de su país (arts. 52 y 53 CADH). Su cargo durará seis años, con posibilidad de una sola reelección.

- Competencia:

a) “ratione personae”: a partir de la reforma del reglamento en 2009, la presunta víctima se convierte en parte del proceso, incorporando mayor capacidad procesal, y la Comisión posee un rol similar al de Ministerio Público Internacional.

b) “ratione materiae”: la condición inexcusable para admitir la competencia de la Corte, es que el Estado demandado haya ratificado el Tratado cuya violación se discute, con el alcance que permitan las reservas que hubiere efectuado y los hechos denunciados hayan sucedido con posterioridad a su ratificación.

c) “ratione temporis”: tres momentos deben ser ponderados para admitir la competencia en razón de tiempo de la Corte, el de aceptación de la competencia de la Corte, el de la ratificación de la CADH o del Tratado cuya violación se invoca, y aquel en que se produjeron los hechos lesivos al derecho humano.

- Funciones:

1. Función contenciosa: se refiere a la función de llevar a cabo un caso y dictar sentencias para los mismos.

2. Función consultiva: cualquier Estado miembro de la OEA puede consultar a la Corte sobre un artículo y su interpretación de la CADH o de cualquier tratado vigente en el sistema, y la Corte dictará una opinión consultiva, que contiene un criterio interpretativo sobre la duda, y debe ser abstracta.

3. Función cautelar (medidas provisionales): significa dictar medidas cautelares de tutela de un derecho cuando este se encuentra en riesgo de ser violado. Son pedidas sólo por la Comisión, no pueden ser peticionadas directamente por particulares. (Por ej: caso cárceles de Mendoza, se dictaron siete medidas cautelares, hasta que la CSJN obligó al Estado a acatarlas).

> CASO: VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ VS. HONDURAS

Hechos probados

Durante los años de 1981 a 1984, en la República de Honduras, entre 100 y 150 personas desaparecieron sin que se haya vuelto a tener noticia alguna de muchas de ellas. Las desapariciones solían iniciarse mediante el secuestro violento de las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de hombres armados, vestidos de civil y disfrazados que actuaban con aparente impunidad en vehículos sin identificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placas falsas. Estos hechos constituían una práctica sistemática perpetrada en contra de personas consideradas por las autoridades hondureñas como peligrosas para la seguridad del Estado. Tanto las autoridades militares y policiales como el Gobierno y el Poder Judicial se negaban o eran incapaces de prevenir, investigar y sancionar los hechos y de auxiliar a quienes se interesaban en averiguar el paradero y la suerte de las víctimas o de sus restos. En este escenario, Manfredo Velásquez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desapareció el 12 de septiembre de 1981, entre las 16:30 y las 17:00 horas, secuestrado por personas vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección.

Excepciones preliminares / Competencia

Falta de declaración formal de admisibilidad por la Comisión

El Gobierno sostuvo que la Comisión omitió un requisito impuesto por la Convención, al no haber reconocido formalmente la admisibilidad del caso. Al respecto, la Corte consideró que si bien para que una petición sea considerada inadmisible se requiere una declaración expresa de la Comisión, tal requisito no aparece para efectos de la admisión. Sin perjuicio de ello, precisó que cuando un Estado suscite una cuestión de inadmisibilidad, la Comisión debe hacer una declaración formal en uno u otro sentido, lo que no ha sucedido en el presente caso.

Omisión del procedimiento de solución amistosa del asunto

El Gobierno alegó que la Comisión infringió el artículo 48.1.f) de la Convención por no haber promovido una solución amistosa en el asunto. La Corte consideró que una interpretación, del referido artículo, de acuerdo con el contexto de la Convención, lleva al convencimiento de que esa actuación de la Comisión debe intentarse sólo cuando las circunstancias de una controversia determinen la necesidad o la conveniencia de utilizar este instrumento. Asimismo, de conformidad con el artículo 45.2 del Reglamento de la Comisión, la misma posee facultades discrecionales, pero de ninguna manera arbitrarias, para decidir, en cada caso, si resulta conveniente o adecuado el procedimiento de solución amistosa para resolver el asunto en beneficio del respeto a los derechos humanos. Atendiendo a las circunstancias del caso, la Corte resolvió desestimar esta excepción.

Falta de realización de una investigación in loco

El Gobierno señaló que la Comisión no había realizado una investigación in loco para verificar los hechos denunciados. Al respecto, la Corte consideró que, del contexto de los preceptos que regulan las citadas investigaciones in loco (arts. 48.2 de la Convención, 18.g) del Estatuto de la Comisión y 44 y 55 a 59 de su Reglamento), se infiere que este instrumento de comprobación de hechos está sujeto a la apreciación discrecional de la Comisión para acordarlo de oficio o a petición de las partes, dentro de las hipótesis previstas por las citadas disposiciones normativas y no es obligatorio dentro del procedimiento regulado por el artículo 48 de la Convención.

Omisión de una audiencia previa

El Gobierno alegó que la Comisión estaba obligada a realizar una audiencia previa. Sin embargo, la Corte consideró que la audiencia previa, como etapa procesal, sólo procedía cuando la Comisión lo estimara necesario para completar la información proporcionada por las partes, o cuando éstas lo solicitaran expresamente. En consecuencia, la Corte declaró infundada la excepción propuesta toda vez que en el presente caso, ni los denunciantes ni el Gobierno, solicitaron la celebración de una audiencia, y tampoco la Comisión la estimó necesaria.

Aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención

En el petitorio relativo a las cuestiones de admisibilidad, el Gobierno solicitó que la Corte declare que la Comisión no agotó los procedimientos establecidos en los artículos 48 a 50 de la Convención, sin cuyo cumplimiento no debió haber referido el caso a la Corte, al tenor del artículo 61.2 de la misma. Sobre el particular, la Corte admitió que los requerimientos de los artículos 50 y 51 no fueron observados a cabalidad, sin embargo puntualizó que este hecho en ninguna forma perjudicó los derechos del Gobierno.

Falta de agotamiento de los recursos internos de jurisdicción interna

Finalmente, el Gobierno objetó la admisibilidad del caso ante la Comisión, por considerar que los recursos internos no fueron previamente agotados. Sobre la excepción propuesta, la Corte manifestó que si bien el agotamiento de los recursos internos es un requisito de admisibilidad ante la Comisión, la determinación de si tales recursos se han interpuesto y agotado o si se está en presencia de una de las excepciones a la exigibilidad de dicho requisito, es una cuestión relativa a la interpretación o aplicación de la Convención. En tal sentido, declaró que habida cuenta que, en este caso, la cuestión de los recursos internos se aproximaba sensiblemente a la materia de fondo, debía ser resuelta junto con las cuestiones de fondo.

Puntos Resolutivos

La Corte decidió, por unanimidad, desestimar la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos opuesta por el Gobierno de Honduras; y declarar que Honduras violó, en perjuicio, de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez los deberes de respeto y de garantía del derecho a la libertad personal (artículo 7 de la Convención), el derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención) y el derecho a la vida (artículo 4 de la Convención), todos ellos en conexión con el artículo 1.1 de la misma.

Reparaciones

La Corte decidió fijar en setecientos cincuenta mil lempiras la indemnización compensatoria que el Estado de Honduras debía pagar a los familiares de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez. Así, la cantidad correspondiente a la cónyuge de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez fue de ciento ochenta y siete mil quinientos lempiras; y la cantidad correspondiente a sus hijos fue de quinientos sesenta y dos mil quinientos lempiras. Sobre este último punto la Corte sentenció que con la suma atribuida a los hijos se debía constituir un fideicomiso en el Banco Central de Honduras, en las condiciones más favorables según la práctica bancaria hondureña.

Interpretación de la Sentencia

La Corte interpretó que la expresión "en las condiciones más favorables" se refiere a que todo acto o gestión del agente fiduciario debe asegurar que la suma asignada mantenga su poder adquisitivo y produzca frutos o dividendos suficientes para acrecerla. Asimismo, la frase según la práctica bancaria hondureña, indica que el agente fiduciario debe cumplir fielmente su encargo como un buen padre de familia y tiene la potestad y la obligación de seleccionar diversos tipos de inversión, ya sea mediante depósitos en moneda fuerte como el dólar de los Estados Unidos u otras, adquisición de bonos hipotecarios, bienes raíces, valores garantizados o cualquier otro medio aconsejable, como precisamente lo ordenó la Corte, por la práctica bancaria hondureña.

**\*Procedimiento ante la Corte IDH**

- Se llama procedimiento contencioso, llega la denuncia de la CIDH, ésta actúa como un ministerio público internacional, como un defensor que representa los intereses internacionales en el proceso, porque se está juzgando a un Estado. La víctima es invitada a participar del proceso por la CIDH para presentar un escrito de argumentos y pruebas en contra del Estado.

- Procedimiento -> medidas provisionales (de ser necesarias) -> audiencias y pruebas -> sentencia.

**\*Sentencias de la Corte IDH:**

- Una vez terminado el proceso, la Corte debe dictar sentencia. Ésta tiene como características: que el fallo debe ser motivado, es definitiva e irrecurrible, y sólo puede ser interpretada por la propia Corte. Tampoco prescriben.

\*Se puede pedir, 90 días luego de dictada la sentencia de fondo, una solicitud de interpretación de sentencia a la Corte IDH para que explique el contenido y alcance de la misma.

- Los beneficiarios de las sentencias siempre son las víctimas y los familiares de las víctimas.

- Las sentencias de fondo resuelven el conflicto (son las sentencias finales). Y las sentencias de reparaciones y costas fijan medidas de reparación para el derecho violado.

\*Sentencia de reparaciones y costas: medidas de reparación

a) no pecuniarias (puede ser monumentos, jornadas de capacitación, homenajes, etc. Y dependen de la aceptación de la sociedad).

b) pecuniarias (se fija una indemnización en dinero, la cantidad específica, la moneda, el plazo, etc.)

c) de reparación de daños (pueden ser materiales, es decir sobre una cosa –por ej lucro cesante- o pueden ser inmateriales, como daño psicológico o pérdida de chance).

- Cuando la sentencia no es cumplida, ésta debe ser ejecutada por el Estado a pedido de la víctima. Se inicia un proceso en el derecho interno llamado ejecución de sentencia. Es la única forma de obligar al Estado a cumplirla, porque se realiza en el derecho interno a través de un juicio ordinario, porque la Corte IDH no tiene competencia para obligar a ningún Estado.

>FALLO SUAREZ ROSSERO VS ECUADOR

Hechos: - Los hechos del presente caso se iniciaron el 23 de junio de 1992 cuando Rafael Iván Suárez Rosero fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Ecuador, en el marco de la operación “Ciclón”, cuyo presunto objetivo era desarticular una organización del narcotráfico internacional. La detención se realizó sin una orden judicial y sin haber sido sorprendido en flagrante delito.

- El señor Suárez Rosero no contó con un abogado durante su primer interrogatorio. Asimismo, se le restringió las visitas familiares. Se interpuso un recurso de hábeas corpus para cuestionar la detención. Sin embargo, éste fue rechazado. El 9 de septiembre de 1996 se dictó una sentencia condenatoria donde se resolvió que el señor Suárez Rosero era encubridor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Fue sentenciado a dos años de prisión y una multa de dos mil salarios mínimos vitales generales.

Sentencia de reparaciones y costas: La Corte decide,

- Ordenar que el Estado del Ecuador no ejecute la multa impuesta al señor Rafael Iván Suárez Rosero y elimine su nombre tanto del Registro de Antecedentes Penales como del Registro que lleva el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en lo que concierne al presente proceso.

-Ordenar que el Estado del Ecuador pague una cantidad global de US$ 86.621,77 o su equivalente en moneda ecuatoriana, distribuida de la determinada manera.

- Ordenar que el Estado del Ecuador pague, por concepto de costas y gastos la cantidad de US$ 6.520,00 o su equivalente en moneda ecuatoriana al señor Alejandro Ponce Villacís y la cantidad de US$ 6.010,45 o su equivalente en moneda ecuatoriana al señor Richard Wilson.

- Ordenar al Estado del Ecuador la aplicación de las siguientes reglas a los pagos determinados en la Sentencia de Reparaciones y Costas:

a. el pago de salarios caídos ordenado en el punto resolutivo segundo (apartado a), estará exento de cualquier deducción distinta a la realizada por la Corte cuando hizo el cálculo respectivo, de conformidad con el párrafo 55.A.a de la presente sentencia; y

b. los pagos ordenados estarán exentos de cualquier gravamen o impuesto existentes o que lleguen a existir en el futuro.

- Supervisar el cumplimiento de la Sentencia de Reparaciones y Costas.

>FALLO GELMAN VS URUGUAY

María Claudia Garcia Iruretagoyena, con 19 años de edad y siete meses de embarazo, fue secuestrada en Buenos Aires (Argentina) y trasladada a Montevideo (Uruguay) a un centro clandestino de detención. Allí dio a luz a una niña en noviembre de 1976. Permanecieron juntas hasta diciembre de ese año y desde entonces Maria Claudia se encuentra desaparecida. El poeta argentino Juan Gelman, nunca dejó de buscar a su nieta, a quien pudo conocer más de 20 años después de su nacimiento.

Las denuncias presentadas por Juan y Macarena Gelman ante la justicia uruguaya no pudieron avanzar debido a la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 para evitar que los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar fueran llevados a juicio.

El 8 de mayo de 2006, María Macarena Gelman García y Juan Gelman, representados por CEJIL, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando a Uruguay por la impunidad en que quedaron estos graves crímenes y la violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que representa la vigencia de la Ley de Caducidad.

La sentencia de la Corte Interamericana, estableció que Uruguay debe remover todo obstáculo que permita la impunidad y dictaminó que “Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Caducidad que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación y el castigo de los responsables ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en el Uruguay”, señala la sentencia.

Asimismo, la Corte Interamericana estableció que el hecho de que la Ley de Caducidad no haya podido ser anulada cuando fue sometida a referéndum no puede ser un impedimento para dejarla sin efecto de inmediato.

Con respecto a la búsqueda de los restos de las personas desparecidas la Corte Interamericana indicó que el Estado uruguayo deberá conducir y llevar a término de modo eficaz las investigaciones por las desapariciones forzadas de Maria Claudia y Macarena , así como de los hechos conexos, determinando las correspondientes responsabilidades penales y administrativas que la ley prevea y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares.

A su vez, la Corte Interamericana estableció una serie de reparaciones, que implican además la adopción por el Estado uruguayo de una serie de políticas públicas para reparar las violaciones sufridas de manera integral, así como un acto de perdón público por los crímenes cometidos y la persistencia de la impunidad.